



ABERRI EGUNA

Con ocasión del Aberri Eguna ELA actualiza su reflexión política y renueva su adhesión al proyecto de una Euskal Herria soberana y libre.

Involución en la agenda nacional

En este momento nuestra organización no puede sino mirar al proceso que se sigue en Madrid contra el independentismo catalán. Para ELA, este juicio político confirma el fin de una idea: la de que es posible un encaje de las naciones catalana o vasca en este estado. Pronto se cumplirán 40 años de recorrido estatutario y urge concluir que los caminos seguidos hasta la fecha están definitivamente cortados. Fracasó la lucha armada como vía de ruptura; fracasó el estatutismo como vía posibilista y progresiva para el reconocimiento nacional; han fracasado los intentos de modificación del marco jurídico respetuosos con la legalidad española, como el llamado “plan Ibarretxe” o el Estatut catalán de 2006; y ahora está siendo reprimido –por orden directa de Felipe VI del 3 de octubre de 2017– un proceso civil y pacífico que desembocó hace año y medio en una consulta autodeterminista. El problema, en términos nacionales, no es de las viejas y nuevas derechas españolas. Es también el problema de una gran parte de la izquierda que, desde la muerte del dictador, comparte que no hay ni habrá derecho de autodeterminación.

En este contexto tan duro han resultado descorazonadoras dos actuaciones recientes del Lehendakari Urkullu. En primer lugar, su testificación en el juicio. Ha quedado claro que, una vez se reveló vano su intento de mediación (con un estado que niega a Cataluña el pan y la sal), decidió no hacerse solidario con el liderazgo político catalán y con la consulta. Su oposición a que un proceso similar (de activación social y confrontación democrática) tenga lugar en la CAPV le ha llevado a perder todo equilibrio, haciendo gala de una posición política alejada del sentir del universo abertzale respecto al *procés*.

Un relato al servicio del *statu quo*

El segundo episodio tuvo lugar el pasado día 11 de marzo, día europeo en memoria de las víctimas del terrorismo, en que volvió a exigir un “*reconocimiento del daño injusto causado*”. Si lo que pretendía era que los principios éticos condicionen la política y las alianzas, el lehendakari debería igualmente negarse a homologar democráticamente a aquellas fuerzas que siguen negando que en nuestro país se han producido graves vulneraciones de derechos humanos. El lehendakari y su partido han tomado decisiones definitivas sobre su

política de alianzas, y no precisamente en base a principios éticos. Desde hace años, la entente PNV-PSE-PP opera sin fisuras en materias como la política fiscal o presupuestaria, a pesar de que esas fuerzas persisten en el negacionismo. Por eso, la llamada “batalla del relato” que el Lehendakari lidera no tiene más objeto, a nuestro entender, que el de inhabilitar políticamente a la izquierda abertzale. Se apela a la ética cuando lo que se busca es, por un lado, no hacer operativa una mayoría autodeterminista en la CAPV, y por otro, no discutir ni pactar políticas diferentes con otras fuerzas que no sean el PSE y el PP. En definitiva, se apela torticadamente a la ética para perpetuar un cuadro de alianzas concreto y una agenda netamente estatutista y neoliberal.

Sobre la emergencia de las derechas

ELA observa con preocupación el auge de las expresiones de extrema derecha en toda Europa y en el estado. Pero igualmente manifiesta su preocupación por el hecho de que ese auge está siendo aprovechado por las izquierdas y derechas tradicionales para desviar la mirada de otros muchos déficits democráticos. ELA considera, por ejemplo, que no se otorga suficiente relevancia política al desprecio por parte de las instituciones vascas a las organizaciones de la sociedad civil. Muestras de ello son, por ejemplo, la reciente negativa del Parlamento vasco a aceptar a discusión la ILP planteada por la Carta Social (el Gobierno de Navarra ni siquiera aceptó la recogida de firmas!); el decreto de institucionalización del diálogo social vasco, que contempla la posibilidad de alcanzar acuerdos con la minoría sindical; la persecución permanente de las administraciones al derecho de huelga o la negativa siquiera a reunirse con la representación sindical mayoritaria de nuestro país...

Especialmente grave es el talante anticolectivista de que viene haciendo gala el nacionalismo institucional, muy en línea con la política que reivindica el tridente de las derechas españolas: hoy y aquí se niega al sindicalismo el derecho a emitir opinión sobre materias como la fiscalidad o las infraestructuras... Hace escasas semanas un destacado electo jeltzale se ha negado, por ejemplo, a reunirse con huelguistas si van acompañados por cuadros de nuestro sindicato, lo que pone en evidencia la deriva autoritaria de una fuerza política que exige al sindicato mayoritario ejercer una función de moderación que ELA, evidentemente, no va a asumir. Con todo esto queremos decir que Euskal Herria no es en absoluto un oasis exento de autoritarismo.

Revitalizar la lucha por el autogobierno

La involución que se apunta no puede ser tampoco excusa para devaluar el conflicto de soberanía que está planteado con el estado. Resistir no es vencer si esa resistencia no se arma de razones, de tensión institucional y de movilización social. Resistir no es vencer si lo que acontece es la asimilación cultural, política o lingüística, o la igualación a la baja en condiciones laborales de protección social. La reciente moción aprobada en el Senado, por

ejemplo, para que no se respete el estatuto de Gernika ha merecido una puntual respuesta por parte del Gobierno Vasco. Lo que nuestro gobierno no ha dicho es que carecemos de cualquier instrumento legal para obligar al estado a que la legalidad se cumpla. Ocultar a la ciudadanía vasca este hecho tan básico de que estamos a merced de España es adormecer el conflicto y desnaturalizarlo.

En Nafarroa, la alianza electoral anunciada por las derechas no debería impedir hacer una valoración a fondo sobre el alcance real del cambio promovido por las fuerzas políticas que desalojaron a UPN del gobierno foral. Junto a innegables pasos dados en términos de democratización, euskara, cultura o consideración hacia las organizaciones representativas de la sociedad civil marginadas hasta la fecha, hemos venido denunciando también déficits sobre otras cuestiones. Especialmente relevante ha sido la reciente decisión del Gobierno de Iruña de aceptar a pies juntillas –igual que el de Gasteiz– los márgenes presupuestarios establecidos por el estado (incluso contra el mandato parlamentario) y su negativa a introducir cambios significativos en la política fiscal. Quizás esa sea la razón de la satisfacción de la CEN con el Gobierno. No es tan solo que se renuncie a ampliar el gasto social; se renuncia a algo más elemental y previo, como es mostrar a la sociedad los límites a que está sometido el Amejoramiento y la consiguiente necesidad de avanzar y ampliar nuestro autogobierno.

Consideramos que tanto en Nafarroa como en la CAPV se están haciendo evidentes las limitaciones de lo que la dinámica institucional puede dar. El proceso nacional, en todas sus dimensiones (social, cultural, política...) necesita, ciertamente, de institucionalidad, pero necesita igualmente de acumulación de fuerzas, de movilización militante, de consolidación de cuadros y de establecimiento de una línea estratégica que fortalezca y no debilite las dinámicas sociales.

Memoria, víctimas y presos

Tras el desarme y la disolución de ETA, la agenda relacionada con la paz está en gran medida bloqueada, especialmente en relación con el estado español. ELA se felicita por los resultados alcanzados por la interlocución plural de Iparralde en relación con el gobierno francés. Pero no compartimos la batalla del relato bajo la cual algunos agentes políticos quieren bloquear el debate político en Hegoalde.

Como hemos dicho más arriba, es inaceptable que se otorgue homologación democrática a fuerzas que, como el PP y el PSOE, siguen instaladas en la negación de grandísimas vulneraciones cometidas en el pasado, y legitimando vulneraciones presentes, como la de la política penitenciaria que se aplica a los presos y presas vascas. El alejamiento y dispersión, el aislamiento, la situación de los presos enfermos... constituyen un auténtico escándalo desde el punto de vista democrático y humanitario.

Denunciamos asimismo la ausencia de reconocimiento a las víctimas de distintas violencias practicadas o auspiciadas desde estamentos oficiales. Todas las víctimas tienen

derecho a la verdad, la justicia y la reparación; y a iguales vulneraciones, deben otorgarse el mismo reconocimiento y los mismos derechos. Que el Parlamento de Navarra haya tenido que redactar una ley a la medida del corsé predefinido por el estado es otra muestra de los límites a una política de verdad y reparación.

Se está actuando de manera mezquina en estas materias que tienen que ver con los derechos humanos. Consideramos que la negativa de muchas fuerzas políticas y poderes del estado a aceptar estas cuestiones tienen que ver con la decisión sistemática de impedir la impugnación del conjunto del régimen establecido en 1978. La contaminación ideológica y punitiva que afecta a todos los estamentos y poderes del estado (comenzando por el poder judicial) constituye el cemento fundamental de una estructura de dominación económica, social, cultural y lingüística en que se ha convertido el estado español. La situación de los jóvenes de Altsasu es un dramático ejemplo de esta realidad.

Importantes movilizaciones y necesidad de más alianzas

ELA se felicita por el éxito de no pocas movilizaciones sociales, como la más reciente huelga feminista del pasado 8 de marzo, o la continuada lucha de los pensionistas que han alcanzado en Hego Euskal Herria un eco singular. Igualmente son reseñables las movilizaciones y proyectos a favor de los refugiados en Iparralde, la movilización de los llamados “chalecos amarillos” o las marchas y la huelga juvenil por el clima que certifican un ciclo movilizador muy particular. En este contexto hemos de situar igualmente los conflictos laborales que están siendo protagonizados masivamente por mujeres en el ámbito de los cuidados y sectores privatizados y subcontratados de lo público.

La ausencia de una alianza sindical abertzale estable limita el aporte que desde el mundo del trabajo podemos hacer en la lucha de emancipación nacional, social, cultural, lingüística... Nos gustaría que fuese de otra manera. ELA aborda el debate de las alianzas desde tres convicciones profundas: la primera es que la autonomía del movimiento sindical fortalece al conjunto de la izquierda, aunque eso genere contradicciones; la segunda es que la alianza fortalece a todos los aliados, mientras que la competencia nos debilita; la tercera es que en la actual fase neoliberal la acción sindical necesita de instrumentos de intervención como la caja de resistencia, sin los cuales es difícil sostener luchas efectivas contra la precariedad. El sindicalismo abertzale puede aportar una narrativa de lucha, parcial sin duda, pero muy positiva.

El actual periodo concentrado de elecciones sindicales en Hego Euskal Herria está incrementando la brecha entre el sindicalismo abertzale y el sindicalismo de concertación español, en detrimento de éste. Se refuerzan los sindicatos que defendemos un marco vasco de relaciones laborales, frente a una administración vasca que juega a marco estatal. Esta es una muestra del potencial del soberanismo cuando conecta con las aspiraciones e intereses concretos e inmediatos de las clases populares. Por otro lado, la alianza con otros movimientos y organizaciones que apuestan por ganar la soberanía en cuestiones tan

elementales como la soberanía alimentaria, la moneda o la energía constituye una gran oportunidad para promover una identidad nacional conformada por valores solidarios, democráticos, feministas y ecologistas. Este es nuestro compromiso, trabajar desde la base los elementos cotidianos de la soberanía, comenzando por la organización de las trabajadoras y trabajadores.

Gora Euskal Herria askatuta!

Bilbao, 15 de abril de 2019